

Violencias del paro nacional y en los territorios étnicos:

Algunas reflexiones con mirada internacional

Sheila Gruner¹

Las noticias sobre el paro nacional en Colombia se propagaron como un incendio alrededor del mundo. Llamaba la atención la violencia desmedida por parte del Estado, desplegando los Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD), como respuesta a la protesta pacífica que surgió contra los proyectos de ley tributaria y de salud.

La comunidad internacional recibió las cifras de las primeras semanas del paro con horror y escalofrío: 47 asesinatos, 943 detenciones arbitrarias, 28 víctimas con heridas en los ojos, 12 casos de violencia sexual, 548 desaparecidos, entre otras formas de violencia extrema reportadas por Indepaz y la ONG Temblores². Si bien los medios internacionales ofrecieron una lectura crítica frente al evidente abuso de la fuerza y hubo consternación y una especie de decepción, pero quizás no sorpresa, por parte de la comunidad global, su respuesta no estuvo exenta de profundas contradicciones y falencias.

En este escrito, haré una breve reflexión sobre la relación entre la violencia como respuesta del Estado al paro nacional y la crisis humanitaria que se vive en los territorios étnicos y otras regiones del país en el periodo del post-acuerdo. Luego compartiré algunas respuestas de gobiernos internacionales y algunas críticas por parte de la sociedad civil a nivel global, anotando esfuerzos en curso para visibilizar y promover la importancia de la implementación del Acuerdo de Paz y del Capítulo Étnico en particular.

El paro nacional y la crisis en territorios étnicos

Por un lado, la violencia estatal evidenció la falta de compromiso con los acuerdos de paz logrados en 2016, particularmente los puntos sobre el derecho a la protesta pacífica y la no

¹ Profesora Universidades de Algoma y Carleton (Canadá), socio de OTEC

² <http://www.indepaz.org.co/cifras-de-violencia-policia-en-el-paro-nacional/>

criminalización de la protesta social. Por otro lado, el horror de la violencia inmediata del paro, también hizo más evidente la crisis de violencia en el país contra líderes y lideresas sociales, así como las nuevas olas de violencia que se viven en los territorios indígenas, afro-descendientes y rurales.

Las condiciones inhumanas en algunas comunidades y territorios como el Chocó, el Pacífico sur y algunas zonas del Norte del Cauca, son un indicador de un problema sistemático de discriminación contra los pueblos étnicos y contra el campesinado. Esta violencia va en paralelo con la del paro que también ha tenido un carácter racial, evidenciado en el racismo abierto y la violencia dirigida contra la Minga Indígena en Cali, como en el impacto desproporcionado de la violencia estatal sobre comunidades indígenas y negras-afrodescendientes en general.

Como indica en un artículo escrito por Esther Ojulari y Harrinson Cuero, 35 de los 47 asesinatos ocurridos entre el 28 de abril y el 8 de mayo, fueron en Cali, donde vive una población mayoritariamente Afro-descendiente. Dicen que “no es una sorpresa que el racismo estructural y sistemático está profundamente incrustado en Cali. Muchos de los casos más agresivos de la violencia del Estado han sido perpetrados en barrios cuya población es mayoritariamente Afro-descendiente, tratando a estas comunidades como enemigos bélicos”.

También se trata de la inequidad estructural que fomenta las condiciones para la proliferación de economías ilegales y violencias armadas, así que cuando entran propuestas de ley, como de hecho ocurrió, sin atender a la raíz al problema, las condiciones son perfectas para que surja un paro nacional. Es importante recordar que también surgieron otros paros cívicos importantes en regiones como Chocó y Buenaventura, de esta misma manera.

Por esta razón, la violencia que se vio por las pantallas y los medios masivos de comunicación a través del mundo, también puso en evidencia la falta de compromiso real del Estado y, de alguna manera, de la comunidad internacional, con la implementación de lo que se conoce como el Capítulo Étnico, el punto 6.2, del Acuerdo de Paz.

Al mismo tiempo que se preparaban para el inicio del paro, las organizaciones étnicas que conforman la Comisión Étnica para la Paz y los Derechos Territoriales, estaban organizando la campaña “Acuerdo Humanitario Ya!” para aplicar en territorios y comunidades que estaban

reviviendo una crisis humanitaria, pues el Estado no había actuado de manera contundente para proteger a la población civil. Esta violencia contra comunidades racializadas en gran medida estaba, y sigue estando, fuera del radar nacional e internacional. Son lugares de alto interés económico en donde, además, viven pueblos indígenas y negros-afro-descendientes palenqueros y raizales.

Aunque el Estado Colombiano, es el principal responsable del avance o no del país hacia la paz, la comunidad internacional también juega un papel importante. Las economías ilegales son también economías globales con vastas infraestructuras en el exterior.

Además, las violencias incluso “legales” como las que hemos visto en el paro, cuentan con equipo y entrenamiento proporcionados por otros países dentro de una política de “paz y estabilización”. Las condiciones y determinantes de la violencia que se vive en los territorios étnicos tienen todo que ver con economías e intereses globales, tanto nacionales como regionales.

Algunas respuestas internacionales -gubernamentales frente el paro

Los gobiernos de Estados Unidos, Noruega, Alemania y Canadá, por nombrar algunos, publicaron pronunciamientos oficiales. La gran mayoría indicaron estar alarmados por la represalia tan violenta del Estado colombiano e hicieron un llamado a una respuesta más “moderada” del uso de la violencia o un rechazo total de su excesivo uso durante las manifestaciones. Hubo, también, varios países que expresaron preocupación por los “bloqueos” y que hicieron un llamado de calma a todas las partes involucradas.

Canadá, por ejemplo, condenó “el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la fuerza de seguridad”, y pidió un cese de la violencia, enfatizando que “el derecho a asociarse pacíficamente hace una parte fundamental de la democracia y debe ser protegido a toda costa”. También expresó que “los actos de vandalismo y violencia contra los oficiales públicos, tanto como los bloqueos han obstaculizado que los bienes y servicios esenciales sean distribuidos durante la pandemia del COVID-19”.

Frente a la respuesta del gobierno de Estados Unidos, las Ong de derechos humanos, la Oficina de Washington sobre América Latina (WOLA por sus siglas en inglés) manifestó en un comunicado que “55 miembros del Congreso pidieron al gobierno de Biden que denunciara los abusos que se están produciendo y suspendiera la asistencia directa a la policía de Colombia tras los abusos contra los derechos humanos. Sin embargo, funcionarios del gobierno de Biden han emitido pronunciamientos ambiguos e insuficientes sobre las violaciones de derechos humanos que han ocurrido en medio de los disturbos”.

En general, las respuestas internacionales han sido diversas, algunas más contundentes que otras, pero la mayoría con un cierto sesgo. Para empezar, no se hizo mención a la situación ya crítica que antecedió el paro del 28 de abril, ni se expresó el evidente vínculo con, o respuesta adecuada frente a esta “otra” violencia, a la crítica situación experimentada por pueblos étnicos y campesinos en sus territorios, a los nuevos desplazamientos, confinamientos, agresiones sexuales contra las mujeres, los asesinatos y las desapariciones.

Aunque el paro evidenció una creciente tensión en varias regiones del país durante el periodo del pos-acuerdo, así como las condiciones preexistentes que la pandemia ha exacerbado como la inequidad de género y el racismo estructural, la reacción de la comunidad internacional ha sido en ambos casos realmente insuficiente.

De hecho, resulta paradójico que hayan apoyado financieramente el proceso de paz, pero que no presionen suficientemente para que se implemente. Organizaciones y activistas de la sociedad civil, encuentran que las respuestas de los gobiernos han sido a menudo ambiguas, insuficientes o poco comprometidas con la paz.

Visibilidad y activismo en el exterior: compromisos con la paz y el Capítulo Étnico

Algunas posiciones internacionales más fuertes frente al paro surgieron, en parte, por las presiones de la ciudadanía: redes de activistas, el sector académico, organizaciones de derechos humanos, sindicatos, entre otros; escribieron cartas, organizaron protestas solidarias y denunciaron al gobierno de Colombia en el exterior. También hubo una exigencia generalizada

para que los gobiernos lejanos, pero con vínculos fuertes de comercio, se manifestaron y presionaran para parar la violencia y para pedir un abordaje el contexto subyacente de inequidad severa, falta de atención a la pandemia, y falta de garantías para la oposición política y las opiniones discrepantes.

Amnistía Internacional, WOLA y otros organismos de derechos humanos produjeron cartas y comunicados presionando al gobierno de Biden, no solamente frente la violencia estatal de Colombia, sino la violencia incrementada contra pueblos étnicos en los territorios. Amnistía Internacional publicó una verificación digital de material audiovisual, confirmando que el ESMAD usó fuerza excesiva e innecesaria. También documentaron el uso de civiles armados que acompañaron a los oficiales de la Policía Nacional y que los incidentes no eran esporádicos ni aislados, sino que reflejaron un patrón de violencia por parte de las autoridades, incluyendo la tendencia a estigmatizar, criminalizar, militarizar y reprimir la protesta social.

De igual manera, la Red Global – Pueblos Étnicos y Paz, con alrededor de 40 miembros en varios países (Canadá, EEUU, España, Francia, Alemania y Colombia, entre otros) organizó una serie de acciones y eventos, incluyendo encuentros virtuales con analistas, activistas del paro y representantes de organizaciones. Publicaron también varios artículos de análisis, así como una carta firmada por más de 400 personas, en la que denuncian la violencia del paro y la remilitarización de los territorios étnicos.

Y en un esfuerzo conjunto de varios sectores sociales, se presionó para que pudiera darse la visita de verificación y monitoreo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esto se logró, en parte, gracias a una petición firmada por más de 600 organizaciones a nivel internacional. La visita, ocurrida entre el 8 y 10 de junio, dejó como resultado un crítico informe frente el actuar del gobierno Colombiano en el paro.

Por otra parte, una misión humanitaria de parlamentarios de Catalunya, que se llevó a cabo para revisar la situación de derechos humanos en el marco del paro ,concluyó en su informe que los jóvenes tienen pocas oportunidades para el futuro y que han sido víctimas de la represión excesiva del estado.

Actualmente, varias organizaciones de la sociedad civil están pidiendo al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas que presione para que haya un mayor compromiso por parte del gobierno de Colombia en cuanto a la implementación de los acuerdos de paz y el Capítulo Étnico en particular: las vidas de muchas personas dependen de ello.